



TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN

SALA LABORAL

Medellín, agosto 3 de 2022

Radicado: 05001 31 05-005-2017-00530-01

Demandante: AIDA ZULIA VALOYES MENA

Demandado: PROTECCIÓN
NACIÓN – MINISTERIO DEL TRABAJO
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA.

Tema: COMPATIBILIDAD PENSIÓN y DEVOLUCIÓN DE SALDOS.

La Sala Sexta de decisión, presidida por el magistrado ponente DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN, e integrada por las magistradas MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA Y ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ, procede a emitir sentencia dentro del proceso ordinario laboral de la referencia; decisión que se emite en forma escrita atendiendo a las disposiciones del artículo 13 de la ley 2213 de 2022.

Acreditados los presupuestos procesales y sin que se evidencian causales de nulidad que invaliden lo actuado, se procede a emitir la presente decisión.

ANTECEDENTES

La accionante instauró proceso ordinario solicitando se ordene a PROTECCIÓN S.A reconocerle la devolución de saldos, junto con los intereses de mora e indexación.

Para sustentar sus pretensiones señaló que nació el 18 de julio de 1948, solicitó afiliarse a PROTECCIÓN S.A. desde abril de 1999, que realizó aportes a dicha

entidad desde el 1 de junio de 1999 a agosto de 2007. Que no alcanzó a reunir los requisitos mínimos para acceder a la pensión de vejez en el RAIS, razón por la cual ha solicitado el reconocimiento y pago de la devolución de saldos y en el último requerimiento se le informó que tenía en su cuenta de ahorro individual un valor \$16.603.767.

El *A quo* ordenó a PROTECCIÓN a reconocer y pagar la devolución de saldos a la demandante, pues la pensión que reconoce CAJANAL fue de conformidad con el régimen exceptuado del que era beneficiaria al desempeñarse como docente, y los aportes realizados al RAIS fueron posterior a la pensión obtenida por el periodo desempeñada como docente en instituciones públicas, además, tratándose del régimen exceptuado es posible que cotizara además en el régimen general.

Inconforme con la decisión fue **recurrida por PROTECCIÓN**, quien reiteró sus argumentos respecto de la incompatibilidad de la devolución de saldos del RAIS con la pensión de jubilación que la demandante devenga desde los años 90 y que reconoce CAJANAL.

ALEGATOS

Concedido el término que establece el artículo 13 de la ley 2213 de 2022, la apoderada de Protección reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación, insistiendo en la incompatibilidad que existe entre la pensión que percibe la demandada por la UGPP antes CAJANAL y la devolución de saldos, indicando que no ha sido un actuar caprichoso de la entidad, pues se ha apegado a la norma. Solicitó sea revocada la decisión de primera instancia y en su lugar, absuelta de todos los cargos.

CONSIDERACIONES

Sea lo primero indicar que en este caso se encuentran por fuera de discusión que 1) la demandante se afilió a PROTECCIÓN el 1 de junio de 1999 (pág. 15). 2) que

solicitó el 21 de agosto de 2008 solicitó información respecto de los aportes hechos al fondo privado y el proceder para reclamarlos (pág. 33) **3)** solicitó nuevamente el 22 de julio de 2011 información de cómo proceder para reclamar los aportes realizados en PROTECCIÓN (pág. 35). **4)** que el 19 de abril de 2017 solicitó devolución de saldos (pág. 37 a 40). **5)** que el 6 de abril de 2017 solicitó certificación de valores de la cuenta de ahorro individual. (pág. 41). **6)** que PROTECCIÓN a través de comunicado del 24 de mayo de 2017 en donde indicó que teniendo en cuenta que se encuentra pensionada desde 1994, la afiliación de la demandante fue anulada y los recursos obtenidos en razón de la afiliación serían enviados a la UGPP como sucesora de CAJANAL (pág. 43 a 45). **7)** que a través de resolución 022421 de 1998 CAJANAL reconoció pensión de vejez desde el 18 de julio de 1998 en cuantía de \$945.971,33 (pág. 145 a 149).

Detallado lo anterior, en esta instancia se discute la compatibilidad de la pensión de jubilación de la que goza la demandante desde el año 1998 que reconoció inicialmente CAJANAL y actualmente a cargo de la UGPP y la devolución de saldos por los aportes realizados en el RAIS a partir del año 1999 por un empleador privado.

Sea lo primero indicar, que la apoderada de PROTECCIÓN argumentó sus reproches frente a la decisión de primera instancia en el artículo 279 de la ley 100, indicando que la demandante estaba excluida del régimen general de pensiones al prestar sus servicios como docente en entidades públicas.

Sobre la tesis expuesta por la apelante, la H. Corte Suprema de Justicia ha sido pacífica al indicar que son compatibles la prestación que se reconoce a los docentes en razón del régimen exceptuado al que perteneció y las causadas en el régimen general que se otorgan en razón de la prestación de sus servicios como docentes en entidades particulares. Así, ha indicado que es obligación de las entidades privadas afiliar al régimen general a sus docentes, pues desde la creación del ISS en 1940 existe la obligación de afiliación, sin que los empleadores puedan sustraerse de la misma. En ese sentido, es claro que los docentes pueden prestar sus servicios para entidades públicas, ya sean entes territoriales, nacional o departamental y al mismo

tiempo tener vinculación con entidades de carácter privadas, de las cuales, tratándose de entidades públicas tienen la obligación de cotizar en el régimen especial y las entidades privadas en el régimen general.

En ese sentido, no podría predicarse, entonces, que el empleador tiene la obligación de cotizar al trabajador en el sistema general de pensión, sea cual sea el régimen que elija, y el trabajador no tiene derecho a recibir las prestaciones que en virtud de dichos aportes se causan.

Ahora, si bien desde el artículo 34 del decreto 692 de 1994 se estableció la posibilidad de acumular cotizaciones del régimen especial y el sector privado, y que las administre precisamente ese régimen especial, la H. Corte Suprema ha indicado que tal y como lo describe la norma, se trata de una posibilidad, y en ese sentido es eminentemente potestativo por parte del trabajador, así *“es una opción formulada en términos positivos, como un derecho y no como una imposición, que permite a los docentes oficiales afiliados al Fondo del Magisterio que cumplan la condición de recibir remuneraciones del sector privado, seleccionar la opción que consideren pertinente en relación con las alternativas que allí se plantean: i) que esos aportes adicionales se administren en el Fomag o, ii) que sean gestionados en cualquiera de las administradoras del régimen de prima media o de ahorro individual con solidaridad”*.

Reitérese sobre la compatibilidad de prestaciones que aquí se discute, la H. Corte Suprema ha indicado en sentencia SL3775 de 2021:

Es que no puede confundirse el hecho de la afiliación del demandante en instancias al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, en su calidad de docente vinculado laboralmente a instituciones de carácter público, con su trabajo para instituciones particulares y la consecuente incorporación al Sistema General de Seguridad Social, pues, en cada caso, rigen reglas específicas, que aplican según la relación que se predique, lo que no significa que no sea posible gozar de la doble atribución, simultáneamente, y obtener las prestaciones que correspondan a cada uno de ellas, cumpliendo los requisitos del caso.

Finalmente, ha de resaltarse que las semanas que se tuvieron en cuenta para el reconocimiento de la pensión de jubilación son diferentes a las cotizadas, estas últimas sobre las cuales, se deben tener en cuenta para la devolución de saldos, pues las primeras obedecen a los servicios prestados por la demandante como docente para el Departamento de Antioquia y las segundas obedecen a labores prestadas a la Universidad De Antioquia desde el año 1999 y que fueron cotizadas al fondo privado.

Costas en esta instancia a cargo de PROTECCIÓN, se fijan en la suma de 1SMLV a cargo de cada una y en favor de la demandante.

En mérito de lo expuesto, administrando justicia en nombre de la república de Colombia y por autoridad de la ley, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL, **CONFIRMA** la decisión tomada por el JUZGADO QUINTO LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN.

Lo resuelto se notifica a las partes por Edicto. Se ordena la devolución del expediente al Juzgado de origen.

Los Magistrados,


DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN


MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA


ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ



TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
SALA LABORAL

EDICTO VIRTUAL

La secretaría de la Sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín notifica a las partes la siguiente providencia:

Radicado:	05001 31 05-005-2017-00530-01
Demandante:	AYDA ZULIA VALOYES MENA
Demandado:	PROTECCIÓN NACIÓN – MINISTERIO DEL TRABAJO FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A
Decisión	CONFIRMA
Magistrado ponente	DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

Fijado hoy 8 de agosto de 2022 a las 8:00 am, desfijado en el mismo día a las 5:00 Pm y se publica en la página web institucional de la Rama judicial por el término de 1 día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 idíbem. La notificación se entenderá surtida al término de fijación del Edicto

RUBEN DARÍO LÓPEZ BURGOS
SECRETARIO